

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 16° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2829-2021
CARATULADO : YÁÑEZ/FISCO-CDE

Santiago, dieciocho de Abril de dos mil veintidós.

Vistos.

Que, con fecha 19 de marzo de 2021, comparece don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas, habilitado de derecho, en representación de don **Gidio Yáñez Heredia**, empleado, todos domiciliados para estos efectos en Carmen 602 departamento 2611, comuna de Santiago, quienes deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por don **Juan Antonio Peribonio Poduje**, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago.

Que, con fecha 24 de mayo de 2021, el demandado contestó la demanda.

Que, con fecha 03 de junio de 2021, el demandante evacuó la réplica.

Que, con fecha 11 de junio de 2021, el demandado evacuó la réplica

Que, con fecha 07 de diciembre de 2021, se recibió la causa a prueba.

Que, con fecha 11 de abril de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando

Primero. Que, comparece don Mario Armando Cortez Muñoz y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas, en representación de don Gidio Yáñez Heredia, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del



«RIT»

Foja: 1

Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizados.

Fundan su demanda en la detención sufrida por su representado el día 19 de septiembre de 1973, por parte de carabineros, militares con trajes de camuflajes y civiles, siendo trasladado desde su domicilio a la comisaría de Carabineros, en un bus donde fue lanzado al piso, golpeado con golpes de puño, pies y culatazos.

Agrega que en la comisaría lo encerraron en un calabozo sin luz, en pésimas condiciones higiénicas, con sus ojos vendados permanentemente, expresando que lo desnudaron, lo mantuvieron privado de alimentación, agua e incomunicado, sufriendo golpes y obligándolo a estar en posturas forzadas.

Indica que durante los interrogatorios le aplicaron corriente en todas las partes de su cuerpo, en los genitales, en las orejas, en la boca, en las piernas, en los pies, en la cabeza, señalando que, además. lo obligaron a escuchar y presenciar torturas de otros detenidos.

Manifiesta que fue trasladado a la Base Naval de Talcahuano, en cuyo trayecto lo golpearon y sometieron a un simulacro de fusilamiento. En la Base fue sometido a interrogatorios realizados por el servicio de inteligencia naval y la DINA, en celdas ubicadas en el subterráneo, con aplicación de corriente y el submarino seco y el mojado, la ruleta rusa, muchos golpes y posiciones forzadas, además lo sumergieron en un pozo por varios minutos con los pies amarrados, simulacros de fusilamiento, torturas que se aplicaban a diario y a cualquier hora, haciéndole ver torturas de otros presos políticos.

Añade que fue trasladado al campamento de prisioneros Isla Quiriquina, en muy malas condiciones físicas, siendo ingresado en una piscina vacía llena de presos políticos, la cual estaba rodeada de grumetes armados que les apuntaban a cada rato haciendo como si les fueran a disparar, además de orinarse sobre los presos. Expresa haber estado varios días incomunicado, que se le aplicó corriente en los interrogatorios, ingestión de agua a presión, fue amarrado y sumergido en el mar, en el



«RIT»

Foja: 1

muelle norte de la isla, durante la noche totalmente desnudo, tenía que efectuar ejercicios físicos agotadores en la intemperie. Indica que finalmente fue liberado el 12 de octubre de 1973.

Agrega que su representado fue reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos por el propio Estado chileno.

Tras una explicación del contexto socio-político de la época, manifiestan que en virtud de la legislación nacional e internacional el Estado es responsable de los perjuicios causados a la víctimas de los delitos de lesa humanidad, agregando que la acción indemnizatoria es imprescriptible y que el daño moral provocado por la detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos crueles, inhumanos y deliberados, acarrearón a su representada graves daños y que hasta el día de hoy se traducen en dolor, sufrimiento, impotencia, miedo y amargura.

Previas citas legales, solicitan tener por deducida demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, y condenarlo al pago de la suma de \$300.000.000.-, más reajustes, intereses y costas, o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero que estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Segundo. Que, comparece la abogada doña Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, al contestar la demanda principal, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone a continuación.

Opone en primer lugar la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

Reparaciones mediante transferencia directa de dinero y pensiones.

En tal sentido manifiesta que las indemnizaciones que el demandante solicita se desenvuelven en el marco de las infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En efecto, la



«RIT»

Foja: 1

Ley Nro. 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante reparaciones mediante transferencias directas de dinero, mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas, lo que permite que numerosas víctimas obtengan una reparación monetaria. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, haciéndose referencia en la discusión de dicha ley incluso al objeto indemnizatorio de reparación moral y patrimonial de aquella.

Hace presente que a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-, por concepto de reparaciones de daño moral ocasionado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Agrega que estas pensiones han sido una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, además de la indicada pensión, la Ley 19.123 consagra además transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios.

Reparaciones específicas.

Expresa que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes números 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Indica en primer término que la ley 19.992 (y sus modificaciones) estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, todos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Agrega que así, se estableció para quienes figuraran en dicha nómina una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consigna adicionalmente, se concedió a los beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de



Foja: 1

Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Precisa que el PRAIS cuenta con un equipo compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Menciona que también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, junto con beneficios en vivienda, correspondiente al acceso a subsidios para vivienda.

Reparaciones simbólicas.

Expone que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino que precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. En este sentido refiere una serie de reparaciones de carácter simbólico en las que ha incurrido el Estado (Memorial del Cementerio General, establecimiento del Día del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros).

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De lo expresado anteriormente concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera



«RIT»

Foja: 1

del Estado que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Así las cosas, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones. Cita jurisprudencia de nuestro Tribunales Superiores de Justicia en apoyo de su posición.

En subsidio opone excepción de prescripción extintiva.

En subsidio opone la prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducidas en este proceso civil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código. Solicita que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.

Esgrime que conforme al relato efectuado por los demandantes, las detenciones, privaciones de libertad y torturas se produjeron en un lapso de tiempo que va entre noviembre de 1974 y octubre de 1975.

Razona expresando que incluso entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 13 de septiembre de 2019, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en la norma recién citada.

Señala que en subsidio de la excepción de prescripción recientemente referida, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, ya que entre la fecha en que



«RIT»

Foja: 1

se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción indemnizatoria, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Refiere finalmente sobre la alegación del demandante en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria de autos, indica que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, no es factible, a su juicio, apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Cita variada jurisprudencia al respecto.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria

Que en la especie se han ejercido acciones de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que las acciones impetradas pertenecen -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Agrega que en base a normas contenidas en el Derecho Internacional, que no hay norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar

En cuanto al daño e indemnización reclamada.

Interpone en subsidio de las defensas y excepciones reproducidas anteriormente, las siguientes alegaciones respecto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más



«RIT»

Foja: 1

soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Enfatiza en que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberán ser justificadas íntegramente.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad era precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Finaliza su contestación señalando que no procede el cobro de reajustes e intereses, en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja la demanda y establezca esa obligación, solicitando que de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

En razón de lo expuesto previamente, pide tener por contestada la demanda y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.



«RIT»

Foja: 1

Tercero. Que, al evacuar la réplica, la parte demandante, expresó lo siguiente.

En cuanto a la excepción de reparación integral, indica que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley N° 19.123 no es óbice ni inconveniente alguno para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República, por lo que la excepción de pago opuesta por el Fisco resulta inconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice al Derecho Internacional.

Concluye y reitera en atención a lo expresado en el párrafo anterior, que el régimen de pensiones asistenciales invocado por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

En cuanto a la excepción de prescripción expone que la jurisprudencia de los Tribunales Letrados, Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que en razón de lo reseñado en el párrafo anterior, cualquier intención de diferenciar la acción civil y penal en materia de derechos humanos resulta discriminatoria al otorgar un tratamiento desigual, no permitiendo al ordenamiento jurídico guardar la debida coherencia y unidad que se le reclama.

En cuanto al monto de la indemnización, reajustes e intereses, manifiesta que los montos demandados están totalmente ajustados a la justicia, ya que se trata del daño moral de quien fue sometido a detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos inhumanos y deliberados, lo que generó gran daño a su vida emocional y personal.

Posteriormente cita latamente sentencias de la Excma. Corte Suprema que señalan la imprescriptibilidad de la acción civil, así como el rechazo a considerar que la indemnización se encuentra íntegramente indemnizada por el Fisco de Chile.

Finalmente reitera que los hechos denunciados en actos corresponden a crímenes de lesa humanidad que provocaron daños morales por haber vulnerado los derechos subjetivos inherentes al demandante, configurándose la responsabilidad estatal.

Cuarto. Que, al evacuar el trámite de duplica la parte demandada reitera los fundamentos de hecho y de derecho de su contestación fiscal, especialmente en cuanto a la excepción de pago y a la excepción de prescripción.

Quinto. Que, a fin de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió prueba instrumental, acompañando copia simple de los siguientes documentos:

- 1- Copia de Extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile,
- 2- Copia de presentaciones del Psicólogo Freddy Silva G;
- 3- Copia de Conferencia Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena;



- 4- Copia del informe secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos;
- 5- Copia del Artículo denominado Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador;
- 6- Copia del Informe Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico, realizado por la Vicaria de la Solidaridad.
- 7- Copia del Informe Algunos Factores de Daño a la Salud Mental;
- 8- Copia del Informe sobre la tortura, tratos crueles e inhumanos y su impacto psicológico;
- 9- Copia Informe Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos;
- 10- Copia del Informe Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos;
- 11- Copia del Informe Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas;
- 12- Copia del estudio del neuropsiquiatra Jacobo Riffo y la Psicóloga Viviane Freraut;
- 13- Copia del estudio significado psicosocial de la tortura, ética y reparación;
- 14- Copia de monografía Lo Igual y lo Distinto en los Problemas Psicopatológicos Ligados a la Represión Política;
- 15- Copia del estudio Trauma Político y Memoria Social;
- 16- Copia de la ponencia Tortura y Trauma Psicosocial;



«RIT»

Foja: 1

- 17- Copia del estudio realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira;
- 18- Copia del monografía realizada por María Teresa Almarza;
- 19- Copia del monografía realizada por el psiquiatra Carlos Madariaga;
- 20- Copia del estudio realizado por el doctor Hernán Reyes;
- 21- Copia del extracto de nómina realizada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura;
- 22- Copia de los capítulos III, V y VIII del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura;
- 23- Copia de Informes La Tortura Modelo de Intervención y La Tortura Un Problema Médico;
- 24- Copia del informe: Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, y;
- 25- Copia del informe psicológico de don Gidio Yáñez Heredia.

Sexto. Que, la parte demandada rindió acompañó el Oficio Ord. DSGT N° 4792-1690 01 de junio de 2021, emitido por el Instituto de Previsión Social Unidad Valech, Rettig y otras Leyes Reparatorias como prueba documental.

Séptimo. Que, atendido el mérito de los antecedentes que constan en autos, esto es, lo expresado por ambas partes en la etapa de discusión y la prueba rendida, se tienen por acreditados lo siguientes hechos:

Que don Gidio Yáñez Heredia fue detenido el 19 de septiembre de 1973, por Agentes del Estado, quienes lo golpearon llevándolo a la comisaría donde lo encerraron, vendaron de ojos, desnudaron, manteniéndolo privado de alimentación y agua, lo incomunicaron propinándole golpes y sometiénolo a posturas forzadas, interrogatorios donde le aplicaron corriente en todas partes de su cuerpo, en los genitales, en las orejas, en la boca, en las piernas, en los pies, en la cabeza.



«RIT»

Foja: 1

Posteriormente fue trasladado a la Base Naval de Talcahuano donde fue sometido a interrogatorios aplicándosele corriente, el submarino seco y el mojado, la ruleta rusa, posiciones forzadas, lo sumergieron en un pozo por varios minutos con los pies amarrados, lo sometieron a simulacros de fusilamiento, y se le hizo mirar las torturas que se les aplicaban a otros presos políticos.

Que se le trasladó al campamento de prisioneros Isla Quiriquina, donde lo apuntaron grumetes armados haciendo como si les fueran a disparar, además de orinarlo encima. Se le dejó incomunicado, se le aplicó corriente, ingestión de agua a presión, lo amarraron y sumergieron en el mar, siendo finalmente liberado el 12 de octubre de 1973.

Queda asentado además que la actora se encuentra calificada como víctimas en el listado de prisioneros políticos y torturados bajo el N°26.758, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.

I.- En cuanto a la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco.

Octavo. Que, las disposiciones legales invocadas por el Fisco, entre ellas las Leyes N° 19.123 ,19.992 y 20.874 como fundamento de su alegación en cuanto a que los perjuicios reclamados ya han sido reparados, denominadas también “Leyes de Reparación”, si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de su deber de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares directos, en ningún sentido las reparaciones materiales y simbólicas en ellas contenidas, a juicio de esta sentenciadora, resultan incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios, de considerarse que concurren los requisitos para ello.

A mayor abundamiento que de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 19.123, se establece una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de la violencia política, que no contempla la limitación pretendida por la demandada, debiendo tenerse presente, a mayor abundamiento, que la propia ley, también conocida como Ley de Reparación, ha ido ampliando



«RIT»

Foja: 1

no sólo los beneficios otorgados sino también la calidad de beneficiarios a lo largo del tiempo.

En el mismo sentido, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta magistratura- con una reparación meramente simbólica.

Además, la indicada normativa y cuerpos legales en general citados tampoco establecen renuncia, prohibición o incompatibilidad alguna con una eventual reparación monetaria que tenga por objeto la reparación integral del daño padecido, razones todas ellas que en consecuencia llevan a esta magistratura a rechazar la alegada excepción de reparación.

En cuanto a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco.

Noveno. Que, de forma previa a entrar al fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de esta magistratura, cabe pronunciarse sobre la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco.

Décimo. Que, en este sentido cabe reiterar que la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad.

Undécimo. Que, al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una



Foja: 1

acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso significaría una negación de Derechos Fundamentales, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que: *“en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados,...si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna”* (Rol CS 3573-2012).

Todas estas reflexiones conducen en consecuencia al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

III. En cuanto a la pretensión indemnizatoria.

Duodécimo. Que, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención, privación de libertad, torturas y actos violentos practicados en contra de don Gidio Yáñez Heredia, al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

Así, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.



Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949.

Décimo tercero. Que, establecida de forma manifiesta la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor; así el daño moral tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

Décimo cuarto. Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral reclamado, el demandante presentó un informe psicológico emitido por la psicóloga Carolina Canales Cortés que concluyen que el demandante sufre trastorno de estrés post traumático de carácter grave, daños, secuelas psicológicas, y alteraciones en su salud mental, manifiesta tristeza y sentimientos depresivos que reaparecen a propósito de fechas significativas asociadas con estos sucesos, además padece trastornos del sueño e insomnios crónicos, producto de los acontecimientos que debió enfrentar como víctima de prisión política y tortura durante la dictadura militar chilena, periodo 1973 a 1990.

Ahora bien, no obstante la prueba rendida y analizada precedentemente que resulta satisfactoria para acreditar el daño moral alegado, la existencia de dicho daño moral en este caso incluso pudo presumirse atendida la gravedad del hecho ilícito, sus consecuencias y las circunstancias que lo rodearon.



«RIT»

Foja: 1

Décimo quinto. Que, en la determinación del quantum de la indemnización, cabe señalar que en la especie se configura el daño moral padecido por el demandante por los motivos expresados en el considerando anterior, razón por la que pese a lo complejo de calcular y cuantificar este tipo de daño, esta Juez lo regula prudencialmente en la cantidad de \$ 50.000.000.- (cincuenta millones de pesos) .

Décimo sexto. Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada.

Décimo séptimo. Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistratura que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 , 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I.- Se rechazan las excepciones de reparación y de prescripción deducidas por el demandado.

II.- Se acoge, parcialmente, la demanda deducida a lo principal del escrito de fecha 19 de marzo de 2021 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma total de \$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a favor de don Gidio Yáñez Heredia, más los reajustes e intereses consignados anteriormente.

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° C-2829-2021.



«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciocho de Abril de dos mil veintidós.**

